

1

España partida en dos

El golpe militar no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. Menos de una semana fue necesaria para aclarar el panorama. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el Ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de mil días.

Golpe de Estado

El general Emilio Mola fue el principal protagonista de la preparación de la rebelión. Su plan preveía que los jefes militares que en las diferentes zonas de España se sumaran a la sublevación declarasen el estado de guerra para poner en manos militares la autoridad civil y controlar o liquidar de esa forma a sus posibles adversarios. El general Mola había sido el último Director General de Seguridad de la Monarquía de Alfonso XIII. Expulsado del Ejército por la República, fue amnistiado en 1934 y el Gobierno de centro derecha, en el que Gil Robles era ministro de la Guerra, lo envió a Marruecos en 1935 a ocupar la jefatura

del ejército de Marruecos. El Gobierno de Manuel Azaña, salido de las elecciones de febrero de 1936, lo trasladó unas semanas después a Pamplona, alejándole del vital ejército de África, y desde esa pequeña ciudad del norte, con el seudónimo de «El Director», dictó los informes y las instrucciones reservadas para los que iban a ser jefes de la rebelión.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga,¹ temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo. El Gobierno suspendió por decreto a los militares rebeldes, disolvió a las unidades sublevadas y licenció a sus soldados. Como señala Gabriel Cardona, «fue un error inútil, porque los rebeldes hicieron caso omiso de los decretos y no dejaron marchar a ninguno de sus hombres. En cambio, las tropas de muchas fuerzas dudosas o gubernamentales abandonaron las filas cuando más falta hacía».²

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En el Gobierno sólo había republicanos de izquierda, prácticamente los mismos que estaban ya con Casares Quiroga, y entraron dos militares: el general Sebastián Pozas en Gobernación y el general Luis Castelló en Guerra. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió. Eso pasó en Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián.

Es fundamental subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el Ejército «en bloque» el que se sublevó contra la República y tampoco fue una «rebelión de generales», como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo

de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español. Eso le pasó en Melilla al general Manuel Romerales, detenido a punta de pistola en su propio despacho por algunos de sus subordinados. Miguel Campins, gobernador militar de Granada, se opuso a la sublevación, lo detuvieron varios oficiales y, conducido a Sevilla, fue fusilado el 16 de agosto acusado de «rebelión». La misma suerte corrió el general Miguel Núñez de Prado, director general de Aeronáutica, que viajó a Zaragoza para convencer a Cabanellas de que no se sublevara.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algu-

nos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933. Era el caso de los generales Aranda, Orgaz o Varela, que iban a tener un papel relevante en el ejército de Franco, aunque otros militares como Asensio Torrado, Romerales o Hidalgo de Cisneros estaban en la misma situación y fueron leales al Gobierno republicano.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la «ausencia total de Poder Público» y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.